



Informe sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios 2025

Indefensos: la seguridad de los
trabajadores humanitarios ante el colapso
de la financiación humanitaria

Humanitarian Outcomes

Resumen de conclusiones principales:

- ▶ En 2024 se registró nuevamente un número récord de muertes en el personal humanitario, con 383 trabajadores fallecidos en incidentes violentos.
- ▶ Además, 308 trabajadores humanitarios resultaron gravemente heridos, 125 fueron secuestrados y al menos 45 fueron arrestados o detenidos.
- ▶ Durante el primer semestre de 2025, la violencia siguió intensificándose, alcanzando cifras de incidentes y muertes que ya superaban en más del doble los totales anuales registrados en la mayoría de los años anteriores a 2021.
- ▶ La mayor parte de las muertes se produjeron en Gaza, seguido de Sudán, Líbano, Etiopía y Siria. Otros contextos con altos niveles de incidentes incluyeron Sudán del Sur, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Ucrania, Myanmar, Yemen, Burkina Faso, Malí y Camerún.
- ▶ Las cifras reflejan no solo la magnitud de la violencia en los conflictos armados, sino también un claro retroceso de los Estados en el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, así como un deterioro de las actitudes públicas y gubernamentales hacia la acción humanitaria.
- ▶ En enero de 2025, el gobierno de los Estados Unidos —anteriormente el mayor donante de ayuda humanitaria a nivel mundial— suspendió abruptamente y posteriormente redujo de manera drástica sus contribuciones, eliminando aproximadamente un tercio de los recursos globales destinados al sector.
- ▶ A medida que las organizaciones humanitarias reducen programas y personal, enfrentan riesgos de seguridad cada vez mayores, con menos recursos y capacidades para mitigarlos, incrementando la vulnerabilidad de su personal.
- ▶ Información anecdótica procedente de múltiples contextos vincula el cierre de programas y la reducción de trabajadores humanitarios directamente con incidentes de seguridad, incluidos ataques perpetrados por exempleados descontentos, protestas comunitarias por la interrupción de servicios y la toma de represalias locales por parte de actores armados.
- ▶ La disponibilidad de datos de alta calidad para el análisis de seguridad también se encuentra en riesgo, dado que USAID desempeñaba un papel fundamental en la financiación de actividades de recopilación y análisis de información en el sector.
- ▶ Los recortes de personal y de funciones de apoyo técnico, así como otras medidas de adaptación — como la puesta en común de recursos y la adopción de mecanismos informales de coordinación en materia de seguridad— reflejan un patrón de desprofesionalización de la acción humanitaria, mientras se acelera la fuga de profesionales y se pierden los avances logrados con gran esfuerzo en la última década.
- ▶ El reciente impulso diplomático, incluida la adopción de la Resolución 2730 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ofrece cierto aliento, pues evidencia una renovada atención política ante la magnitud de la violencia contra los trabajadores humanitarios y el reconocimiento de que el respeto al derecho internacional humanitario atraviesa una grave crisis.



La Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSDB, por sus cifras en inglés) registra los principales incidentes de seguridad que afectan al personal humanitario. Estos incluyen:

- Homicidios
- Secuestros (de más de 24 horas de duración)
- Lesiones graves
- Violación y agresión sexual
- Nueva categoría: arrestos y detenciones (de más de 24 horas de duración)

El presente informe se basa en las estadísticas de incidentes verificados procedentes de la Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, así como en entrevistas con 24 expertos humanitarios de reconocido conocimiento y experiencia.

Para más información y para consultar informes anteriores, visite: <https://www.aidworkersecurity.org/reports>

Introducción

Tabla 1. Principales ataques contra trabajadores humanitarios: resumen de las estadísticas, 2015–2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Número de incidentes	157	166	162	233	279	287	277	248	420	599
Total de trabajadores humanitarios afectados	297	298	322	413	484	489	482	460	617	861
Total fallecidos	111	109	140	131	125	117	141	118	293	383
Total heridos	110	99	103	147	234	242	203	146	210	308
Total secuestrados*	71	89	73	132	123	128	127	195	95	125
Total arrestados/ detenidos**	5	1	6	3	2	2	11	1	19	45
Víctimas internacionales	30	43	28	29	27	25	23	24	27	27
Víctimas nacionales	267	255	294	384	457	464	459	436	590	834
Personal de la ONU	45	71	48	70	37	58	55	76	241	210
Personal de ONGI	173	161	115	188	261	229	211	178	198	247
Personal de ONG nacionales	43	43	85	130	156	172	195	184	123	298
Cruz Roja/ Red Cross/ Media Luna Roja***	33	21	74	25	16	28	11	9	51	100

* Sobrevivientes o estado desconocido.

** Nueva categoría; datos de años anteriores incompletos.

*** Incluye al personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y sociedades nacionales.

El Informe sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios de este año se presenta en un momento de inflexión crucial para la asistencia humanitaria internacional y en medio de un alarmante repunte de la violencia contra el personal humanitario. La edición de 2025 —la decimoquinta desde que se inició el seguimiento de datos— estuvo a punto de no publicarse tras la pérdida de la financiación de la Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSO) por parte del Gobierno de los Estados Unidos, luego de la disolución de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La crisis de financiación que sacude actualmente al sector se suma a la intensificación de los conflictos y a una marcada erosión del respeto a las normas humanitarias y al derecho de los conflictos armados por parte de actores estatales, amplificada en algunos lugares por campañas públicas de desprestigio contra las organizaciones humanitarias.

Los conflictos en Gaza y Sudán siguen siendo los principales responsables del mayor número de víctimas en el personal humanitario, aunque los incidentes también han aumentado en otros contextos, alcanzando cifras históricamente elevadas en Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC), el Líbano, Nigeria, Somalia, Ucrania y Yemen.

La pérdida de financiación, las limitaciones en la capacidad de gestión de riesgos de seguridad y, en algunos contextos, la disminución de la aceptación pública, han expuesto al personal humanitario a un mayor peligro. Testimonios anecdóticos y algunos informes formales indican vínculos directos entre los recortes de programas y los incidentes violentos. Al mismo tiempo, el seguimiento de los incidentes se ha vuelto más difícil, dado que los proveedores de datos y análisis enfrentan graves reducciones presupuestarias. Las organizaciones humanitarias informan que se han visto obligadas a reducir puestos de seguridad, capacidades de comunicación y otros apoyos críticos, forzándolas a tomar decisiones difíciles entre aceptar una mayor exposición al riesgo o abandonar a las comunidades.

En medio de las malas noticias —el aumento de la violencia y la reducción del apoyo a la acción humanitaria—, un hecho alentador ha sido el surgimiento de diversas iniciativas diplomáticas orientadas a proteger a los trabajadores humanitarios. La Resolución 2730 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por primera vez, no solo condena los ataques contra el personal humanitario, sino que también exige rendición de cuentas y reparación judicial, ofreciendo una luz de esperanza en un momento por lo demás sombrío para la acción humanitaria.

1

Ataques contra el personal humanitario: estadísticas recientes

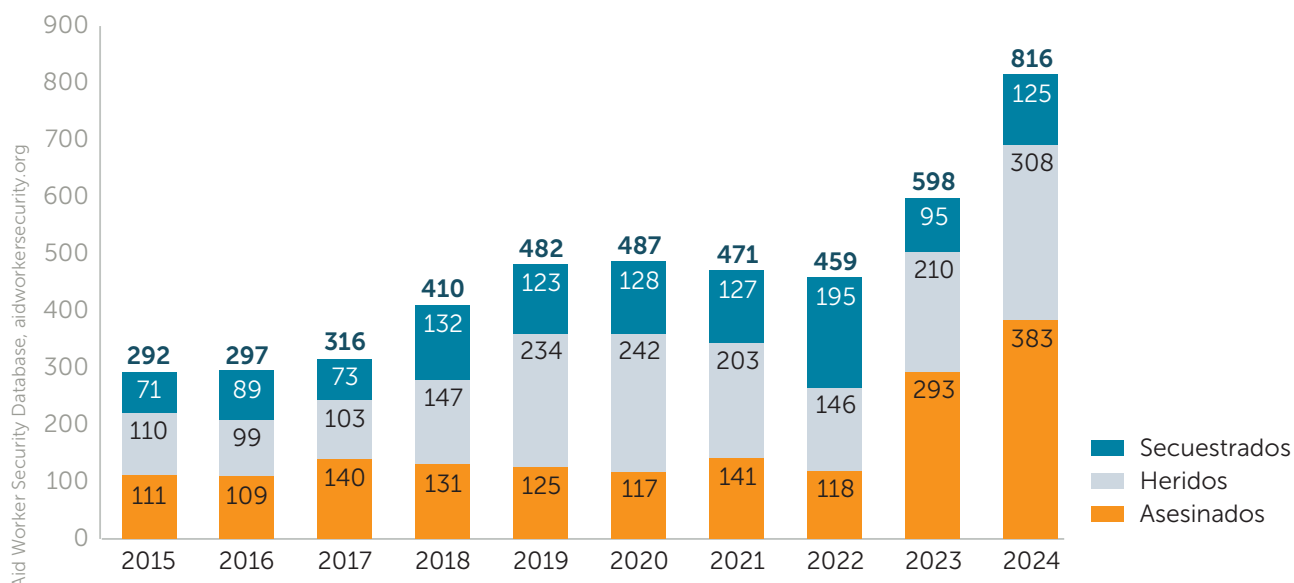
1.1 Un aumento continuo de la violencia

Los ataques contra el personal humanitario continuaron aumentando de manera pronunciada en 2024, y también en el primer semestre de 2025, con un incremento paralelo en el número de personas afectadas y de muertes.

La AWSD registró en 2024 un máximo histórico de 568 incidentes violentos graves contra trabajadores humanitarios (homicidios, secuestros y heridos), lo que representa un aumento del 36% en comparación con 2023. Fue el segundo año consecutivo en establecer récords tanto en el número de víctimas como en el de fallecidos, que aumentaron un 37% y un 31% respectivamente.

En 2024 se produjeron incidentes violentos graves en 40 países, frente a 33 en 2023. Si se incluyen los arrestos y detenciones por parte de autoridades estatales, la cifra asciende a 42 países, lo que pone de relieve tanto la ampliación geográfica de la inseguridad como el creciente papel de los actores estatales en la obstrucción de las operaciones humanitarias. (Véase la Sección 1.3 para más información sobre arrestos y detenciones, una nueva categoría de seguimiento en la AWSD).

Figura 1: Trabajadores humanitarios que fueron víctimas de violencia, 2015-2024



La violencia no disminuyó durante el primer semestre de 2025. Al 30 de junio, los datos provisionales sugieren que las cifras se encaminan a batir récords nuevamente, salvo cambios drásticos en el curso de los conflictos o en la conducta de los actores estatales.

En los primeros seis meses de 2025, aproximadamente 230 trabajadores humanitarios fueron asesinados, una cifra que ya supera el total registrado en todos los años anteriores a 2023.

Siete contextos —la República Centroafricana (RCA), la República Democrática del Congo, Haití, Irán, Malí, Sudán del Sur y Yemen— han registrado más muertes en lo que va de año que en todo 2024.

1.2 Los contextos más inseguros para la acción humanitaria

Gaza sigue siendo el contexto operativo más letal tanto para los receptores como para los proveedores de asistencia. En total, 181 trabajadores humanitarios fueron asesinados en Gaza en 2024, lo que elevó el número total de muertes de trabajadores humanitarios desde el inicio de la guerra a 357 a finales de 2024, y a más de 500 a finales de junio de 2025. El número de víctimas por bombardeos aéreos y artillería se mantuvo constante durante los primeros 14 meses del conflicto, pero el número de víctimas por disparos de armas de fuego se cuadruplicó entre finales de 2023 y finales de 2024. La expansión del conflicto palestino-israelí provocó 20 muertes en el Líbano como consecuencia de bombardeos aéreos, fuego de artillería e intercambios de disparos, a medida que el conflicto se intensificaba en toda la región durante el último año.

La guerra civil en Sudán continuó en 2024, perpetuando la mayor crisis humanitaria del mundo, que afecta alrededor de 30 millones de personas. Sudán registró el segundo mayor número de víctimas entre los trabajadores humanitarios, con 60 muertes, una cifra superior a la registrada en cualquier otro contexto, salvo Gaza, en todos los años documentados. En 2024, Sudán contabilizó 89 víctimas de violencia, aunque es probable que los incidentes estén subregistrados y que, debido a la intensidad del conflicto y a la dependencia de actores locales, el número real de heridos y secuestrados sea mucho mayor. El hostigamiento a voluntarios locales en salas de respuesta de emergencia y cocinas comunitarias ha persistido, ya que las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF, por sus siglas en inglés) consideran a estos trabajadores humanitarios como opositores políticos, sometiéndolos a acoso y detención. En las zonas bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), la ausencia de ley y orden ha dado lugar a violencia arbitraria por parte de individuos armados, lo que, según una ONG sudanesa, genera graves riesgos para los humanitarios que se desplazan a lugares de difícil acceso, donde las fuerzas de control suelen presumir intenciones hostiles.

Desde su primer año completo de existencia en 2012, Sudán del Sur se ha mantenido de forma constante entre los cinco lugares más peligrosos para los trabajadores humanitarios, con 870 víctimas en los últimos 13 años —la cifra más alta registrada en cualquier contexto. A pesar de una reducción en el número de víctimas entre 2023 y 2024, los persistentes robos a mano armada y emboscadas a convoyes humanitarios mantuvieron a Sudán del Sur como el tercer contexto con mayor número de víctimas en 2024, con una disminución en el número de muertes de trabajadores humanitarios, pero un aumento en los secuestros y la criminalidad organizada.

Nigeria registró un incremento significativo en todos los tipos de víctimas (muertes, heridos y secuestrados) entre 2023 y 2024, con un aumento de las muertes de 2 a 12 en un año. La insurgencia en curso y la criminalidad hicieron de las emboscadas en carretera el tipo de ataque más común, mientras que tanto los ataques con armas ligeras como las agresiones aumentaron en frecuencia. Los secuestros y robos violentos en domicilios se produjeron con mayor frecuencia en varias regiones en comparación con años anteriores, lo que pone de relieve los crecientes riesgos de ataques dirigidos.

En Etiopía, aumentaron los ataques contra trabajadores humanitarios durante viajes por carretera, en su mayoría en la región de Amhara, lo que provocó más secuestros y víctimas por armas de fuego ligeras. La mayoría de las emboscadas ocurrieron contra vehículos y convoyes humanitarios claramente identificados, a medida que los actores armados ampliaron sus ataques a las rutas de transporte en más áreas del país que en años anteriores.

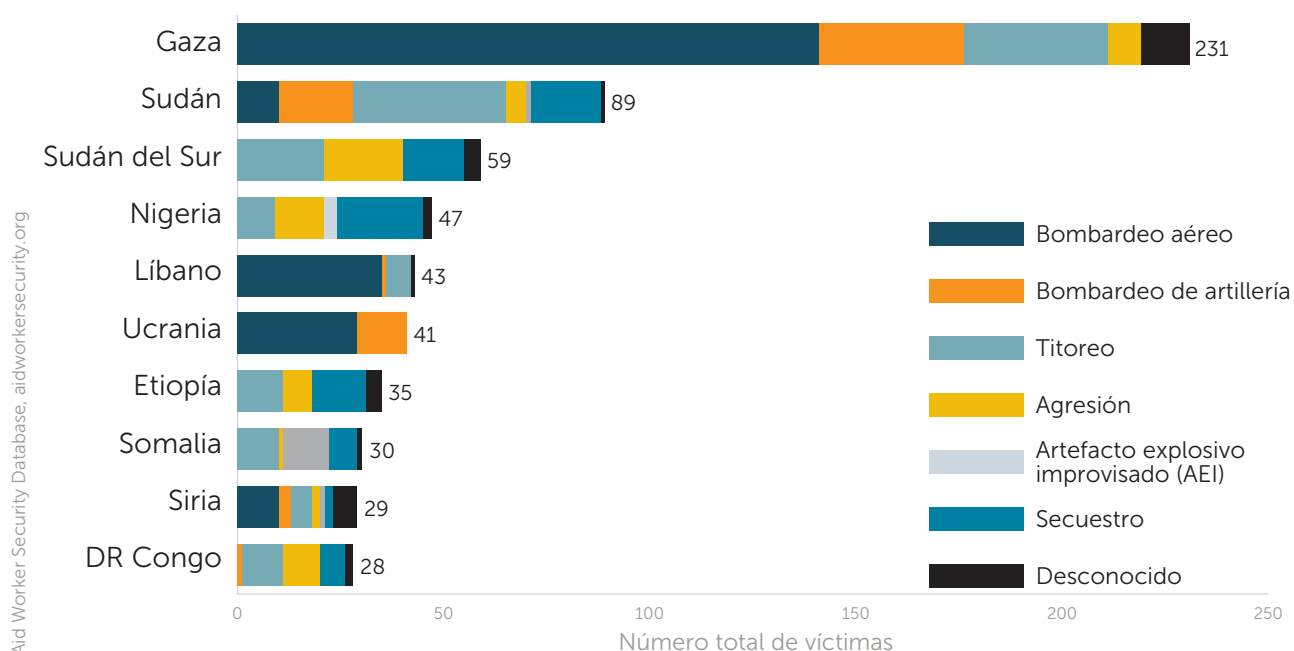
En la República Democrática del Congo (RDC), el número de ataques violentos individuales se triplicó en Kivu del Norte en 2024 y se mantuvo elevado en Kivu del Sur e Ituri, con un aumento de los tiroteos y agresiones en domicilios particulares y espacios públicos. El Movimiento 23 de Marzo (M23) fue responsable de la mayoría de los incidentes de seguridad que afectaron a trabajadores humanitarios en 2024, pero las autoridades estatales también complicaron las operaciones humanitarias con la detención de al menos seis trabajadores humanitarios.

Somalia experimentó en 2024 el mayor número de incidentes individuales de los últimos diez años, con 9 muertos, 14 heridos y 7 secuestrados. El fuego con armas ligeras, los artefactos explosivos improvisados (AEI) en carreteras y los secuestros fueron los métodos más frecuentes, con un incremento del 18% en los ataques atribuidos a Al-Shabaab respecto a 2023.

Tras dos años de reducción en el número de víctimas entre trabajadores humanitarios en Siria, las cifras aumentaron nuevamente en 2024, ya que la caída del régimen de Assad y las hostilidades persistentes en áreas en disputa provocaron un conflicto más intenso que afectó las operaciones humanitarias en el norte y centro del país.

El número de ataques aéreos contra zonas pobladas e infraestructuras civiles en Ucrania aumentó en 2024, causando más víctimas entre los trabajadores humanitarios que en 2023. Los ataques aéreos rusos contra lugares de distribución de ayuda crecieron de forma drástica, evidenciando las reiteradas y crecientes violaciones del derecho internacional humanitario en el conflicto.

Figura 2: Víctimas totales según los medios del ataque, 10 contextos más peligrosos del mundo en 2024



1.3 Tendencias en las tácticas

Los ataques aéreos continuaron siendo la principal causa de muertes entre el personal humanitario, con 163 fallecimientos, principalmente en Gaza, el Líbano y Ucrania. Sin embargo, el uso de armas ligeras también cobró un número significativo de vidas (103) y constituyó el medio de violencia más común en la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Sudán.

El número de secuestros de trabajadores humanitarios volvió a aumentar en 2024, tras la disminución observada el año anterior. La AWSD registró 125 secuestros en 16 países. Los países del Sahel y de la cuenca del Lago Chad encabezaron la lista (Malí, Nigeria, Burkina Faso y Camerún), reflejando los patrones habituales de utilización del secuestro por parte de grupos armados no estatales como medio de presión o extorsión. También se observaron aumentos en Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, particularmente en zonas en disputa o de transición.

Nueva categoría en la AWSO: Arrestos y detenciones

El creciente número de arrestos y detenciones al personal humanitario por parte de autoridades estatales y locales llevó a la AWSO a comenzar a registrar estos incidentes como una categoría distinta en 2025. A menudo utilizados como herramienta de acoso y control, estos arrestos pueden implicar violencia física y resultar tan dañinos psicológicamente como los secuestros perpetrados por actores criminales.

Varias organizaciones humanitarias señalaron que, en los últimos años, las detenciones afectan a un número mayor de su personal —y requieren más esfuerzos en materia de gestión de riesgos de seguridad— que los secuestros. Por ejemplo, la consolidación del poder por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen dio lugar a un número sin precedentes de detenciones de trabajadores humanitarios en todo el país durante 2024.

En la mayoría de las detenciones registradas por la AWSO el año pasado, el personal fue abordado directamente en las oficinas de las organizaciones o en los lugares de ejecución de proyectos, lo que evidencia un alarmante esfuerzo concertado de las autoridades estatales para hostigar y atacar de manera específica al personal humanitario.

1.4 Creciente “localización” de la inseguridad

Casi la totalidad (97%) del personal humanitario fallecido en 2024 eran nacionales del país en crisis donde trabajaban, un patrón coherente con el hecho de que el personal nacional ha constituido históricamente la gran mayoría de la fuerza laboral humanitaria, y consecuentemente, de las personas afectadas. Lo novedoso, sin embargo, es la distribución por empleador. En los últimos tres años, junto con el fuerte aumento de la violencia, se ha observado un cambio significativo en el perfil de afiliación: el personal humanitario más afectado es ahora el contratado por ONG nacionales, mientras que la proporción de víctimas de organizaciones internacionales —en particular, ONG internacionales— ha disminuido de forma considerable. La principal excepción fue Gaza, donde el organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), como principal entidad de respuesta de facto, es el empleador de la mayor parte del personal humanitario.

La transferencia del riesgo y del número de víctimas desde las organizaciones internacionales hacia las organizaciones humanitarias locales se manifestó de forma más marcada en contextos donde la presencia internacional se vio gravemente limitada por una o más de las siguientes condiciones:

- Hostilidad del estado receptor e impedimentos burocráticos a la ayuda (Etiopía, Burkina Faso);
- Deterioro de la percepción pública y disminución de la aceptación de las organizaciones internacionales (Camerún, Malí);
- Amplias zonas donde las autoridades gubernamentales han prohibido el acceso humanitario o donde los intensos combates y la extrema inseguridad mantienen alejadas a las organizaciones (Myanmar, Sudán, Ucrania);
- Falta de financiación e inseguridad crónica, que llevaron a la retirada total o a operaciones a distancia de las organizaciones internacionales (Siria, Somalia, República Centroafricana).

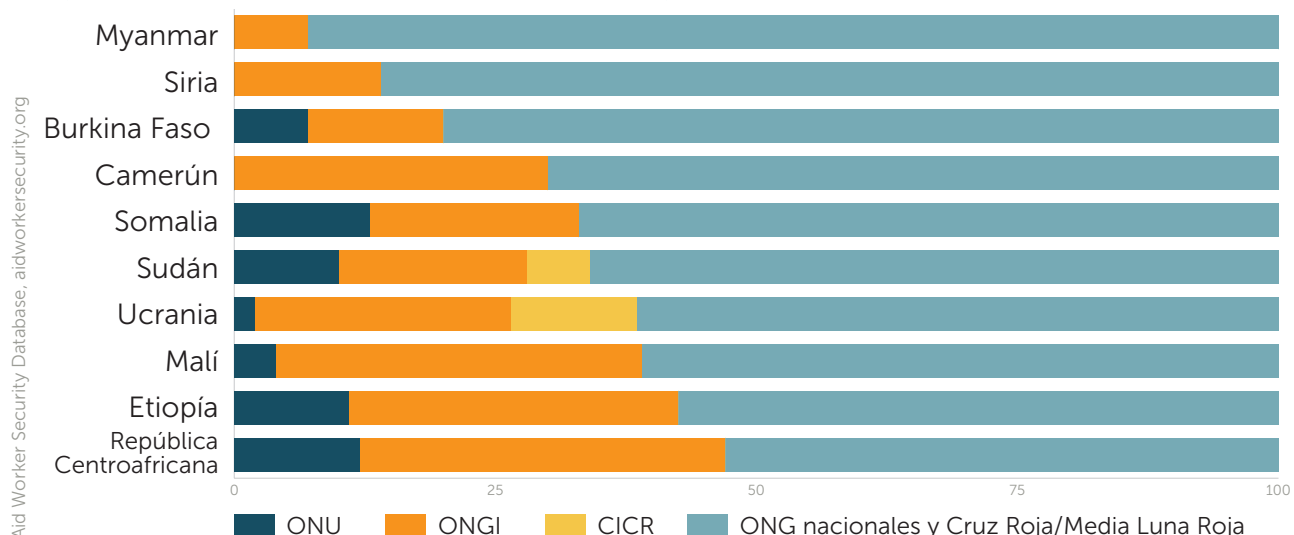
La reducción de la presencia humanitaria internacional también ha hecho que los actores que permanecen en terreno sean aún más vulnerables a campañas de desinformación y de información manipulada, que pueden exacerbar la desconfianza comunitaria y aumentar los riesgos de seguridad.

Nuevas investigaciones en redes sociales en el Sahel evidencian un crecimiento de sentimientos negativos de carácter acusatorio y “antiayuda” tras el cierre de USAID.¹ Esta hostilidad hacia el sector humanitario, visible en el espacio digital, se ha trasladado a la realidad de numerosas organizaciones

¹ Insecurity Insight. (2025, 16 July). *Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/07/15.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-_Emerging-Trends-in-the-Sahel-1.pdf

internacionales que han visto suspendidas sus operaciones en Burkina Faso, Níger y otros países del Sahel. La suspensión generalizada de actores internacionales deja a las organizaciones locales como único recurso para las comunidades vulnerables, aunque investigaciones previas demuestran que a menudo estas no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las funciones de seguridad requeridas.²

Figura 3: Afiliación de las víctimas en los contextos de seguridad más localizados, 2024



La localización de la acción humanitaria y el fortalecimiento de las capacidades locales para una respuesta independiente han sido durante mucho tiempo objetivos explícitos del sector de la asistencia internacional. Sin embargo, el aumento de la inseguridad y la reducción de financiación han dado lugar a una “localización por defecto”, que transfiere de manera directa la exposición al riesgo hacia las organizaciones nacionales, quienes históricamente han recibido menos recursos para garantizar la seguridad de su personal.

Un oficial de riesgos de seguridad de una ONG internacional señaló que su organización estaba evaluando diversas opciones frente a la crisis de financiación, entre ellas la transformación de oficinas nacionales en entidades independientes y/o la transferencia de una parte sustancial de sus programas a socios locales. Advirtió, sin embargo, que esta medida conlleva un riesgo adicional para las organizaciones locales: “Si avanzamos plenamente hacia la localización, veremos un incremento masivo de incidentes, porque siguen contando con menos recursos; si no encontramos una manera de apoyarlas, presenciaremos más muertes”.

² Global Interagency Security Forum (GISF) and Humanitarian Outcomes. (2024). *State of practice: The evolution of security risk management in the humanitarian space*. https://humanitarianoutcomes.org/security_risk_mgmt_humanitarian_space_2024

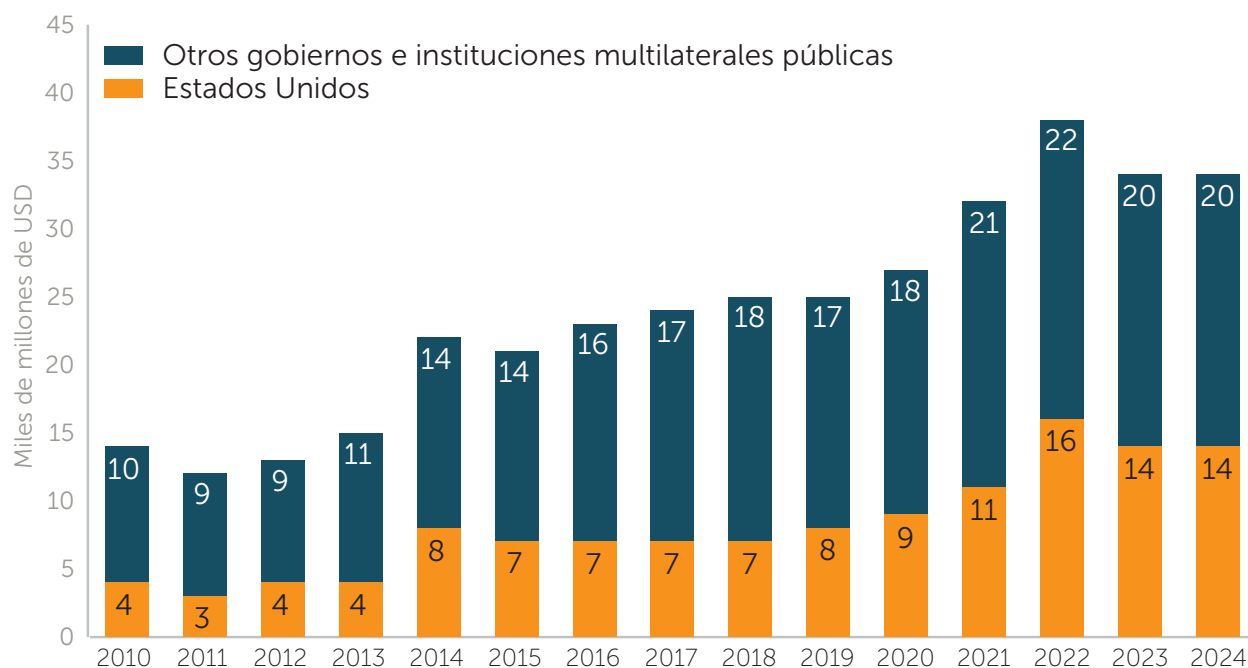
2 La crisis de desfinanciación humanitaria de 2025

El 20 de enero de 2025, el recién investido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para congelar casi toda la financiación estadounidense destinada a la asistencia exterior y al desarrollo. Esta medida inesperada sacudió al sector humanitario, ya que las organizaciones y programas financiados a través de USAID cesaron abruptamente sus operaciones, afectando a millones de personas beneficiarias en todo el mundo. En los meses siguientes, la administración canceló más del 80% de los proyectos financiados por USAID, mientras que la institución, con 63 años de existencia, fue disuelta de facto y su personal despedido; el pequeño remanente fue absorbido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor donante humanitario, representando en la mayoría de los años más de un tercio de todas las contribuciones humanitarias, y constituyendo el pilar del sistema internacional de asistencia. El recorte drástico de este financiamiento esencial, seguido de reducciones por parte de otros grandes donantes como Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, ha comenzado a debilitar la capacidad de respuesta global y deja a millones de personas sin asistencia vital.

El impacto afecta de manera desproporcionada a los mecanismos de soporte de la asistencia humanitaria, ya que USAID fue durante décadas un financiador clave de aspectos como la logística y el transporte (incluido el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas – UNHAS), los servicios de coordinación provistos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA, así como recursos de datos y análisis, incluidas evaluaciones de necesidades e información sobre seguridad.

Figura 4: Participación de Estados Unidos en el total de las contribuciones humanitarias de donantes públicos, 2010–2024



Datos de fts.unocha.org (recuperados el 1 de agosto de 2025)

Junto con la pérdida de los mecanismos de apoyo, el sector corre el riesgo de ver desmantelados los estándares operativos arduamente alcanzados, la experticia técnica y las capacidades de formación profesional, lo que debilita la seguridad operativa en un momento en que la labor humanitaria nunca ha sido tan peligrosa.

2.1 Impactos en las organizaciones: Reducción de personal y cierre de programas

Si bien las reservas financieras permitieron a algunas grandes agencias internacionales posponer los recortes inmediatos, el sector en su conjunto ha recibido un golpe devastador. Se prevé que el impacto pleno se manifieste en 2025–2026, a medida que las organizaciones agoten las medidas de contingencia. Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y varias ONG internacionales ya han anunciado importantes reducciones de personal —con decenas de miles de profesionales despedidos en todo el sector—, el cierre de programas nacionales y la eliminación de áreas funcionales completas de sus operaciones.³

USAID había constituido el principal donante de numerosas ONG humanitarias, llegando a cubrir más de la mitad de los presupuestos de muchas organizaciones con sede en los Estados Unidos. Otras, incluso aquellas que no recibían financiación directa de ese país, también se han visto afectadas, ya que los antiguos socios de USAID recurren ahora al mismo grupo limitado de donantes para compensar la pérdida. La competencia por los recursos restantes se ha intensificado, según señalaron altos responsables entrevistados para este informe, uno de los cuales advirtió: “Ninguna organización es verdaderamente estable en el contexto actual”.

Las organizaciones nacionales y locales, así como las redes comunitarias, han absorbido el mayor impacto de los recortes generalizados en el sector. Dado que los recursos se concentran en la cima del sistema humanitario internacional, los déficits de financiación repercuten en primer lugar —y con mayor severidad— en el nivel comunitario. Una encuesta informal realizada en febrero de 2025 por la Base de Datos Mundial de Organizaciones Humanitarias (GDHO, por sus siglas en inglés) a 284 ONG nacionales reveló que el 79% había tenido que cerrar programas como consecuencia de la retirada de fondos de USAID, en 41 países distintos.⁴ Esta retirada global y repentina de comunidades vulnerables ha dejado a los actores locales en una situación en la que seguirán enfrentando riesgos y amenazas cada vez mayores.

2.2 Impactos en la gestión del riesgo de seguridad

La gestión de riesgos de seguridad en las operaciones humanitarias ha evolucionado durante las dos últimas décadas hasta convertirse en una función técnica especializada, esencial para garantizar el acceso humanitario en los contextos más graves e inseguros. Sin embargo, se trata también de una función costosa, pues depende de personal cualificado —lo que implica formación—, y de equipos para comunicaciones seguras, instalaciones y transporte. La pérdida de financiamiento, la competencia por los limitados recursos disponibles y la fuga de profesionales especializados en seguridad humanitaria amenazan ahora con erosionar los avances alcanzados en este ámbito, con el riesgo de regresar a una época en la que la seguridad se consideraba un aspecto secundario o un complemento discrecional.

Las organizaciones dependen de fondos flexibles para sostener estas funciones transversales, que suelen financiarse tanto mediante gastos generales como a través de partidas presupuestarias específicas para seguridad. USAID había desarrollado un enfoque avanzado de apoyo a la seguridad de sus socios y se distinguía por tasas generosas de recuperación de costos indirectos (gastos generales),

³ See: Loy, I. (2025, 6 de marzo). Why are NGOs cutting staff faster than the UN? The New Humanitarian. <https://www.thenewhumanitarian.org/newsletter/2025/03/06/inklings-why-are-ngos-cutting-staff-faster-un>; and International Council of Voluntary Agencies (ICVA). (2025). The impacts of the US funding suspension. ICVA survey findings. <https://www.icvanetwork.org/uploads/2025/02/Impact-of-US-Funding-Suspension-Survey-Results-ICVA.pdf>

⁴ Humanitarian Outcomes (n.d.) *Global database of humanitarian organisations*. Recuperado el 8 de agosto de 2025 de <https://humanitarianoutcomes.org/projects/gdho>

lo que permitió a sus entidades asociadas fortalecer de manera significativa sus capacidades de gestión del riesgo de seguridad. Como señaló un representante de una ONG internacional: “USAID representaba el 40% de nuestro presupuesto, pero su pérdida impactó en el 75% de nuestra organización debido a la flexibilidad de sus fondos.”

La reducción de liquidez obligó a aplicar recortes drásticos y rápidos en estas funciones transversales. Todas las organizaciones entrevistadas informaron haber eliminado puestos de seguridad, y al menos una perdió la totalidad de su estructura regional de gestión del riesgo de seguridad tras el cierre de oficinas regionales que antes proporcionaban apoyo técnico, análisis y capacidad de respuesta en seguridad a las oficinas nacionales.

Las organizaciones humanitarias han reducido su presencia operativa en múltiples contextos, lo que socava tanto el acceso humanitario como la seguridad de las comunidades. Las organizaciones internacionales están concentrando sus limitados recursos de seguridad en los entornos más peligrosos en los que continúan operando —como Gaza, Sudán, Haití y Myanmar—, al tiempo que los recortan en otros lugares.

La región de América Latina se ha visto particularmente afectada, debido al papel históricamente preponderante de la financiación estadounidense en los proyectos de asistencia en esa región. Las personas entrevistadas señalaron que se han eliminado numerosos puestos de seguridad, dejando a varias oficinas nacionales con un apoyo de gestión del riesgo de seguridad únicamente remoto.

Muchas ONG nacionales y locales ya carecían de personal de seguridad dedicado a tiempo completo, debido a la rigidez de los mecanismos de financiamiento y a los bajos gastos generales que suelen recibir de los socios internacionales. Los severos recortes en la financiación del sector han vuelto esta capacidad aún más inalcanzable. Como expresó un miembro del personal de una ONG nacional: “Antes realizábamos visitas conjuntas al terreno con otras organizaciones... Esto ya no ocurre, porque esas organizaciones ya no están presentes en el territorio o porque se ha vuelto demasiado costoso.”

Pérdida de apoyo logístico y de capacitación

Los recortes a los servicios compartidos han socavado aún más la seguridad en los desplazamientos, en particular por la reducción de vuelos del UNHAS, lo que obliga a un mayor uso de transporte terrestre y, con ello, a asumir los riesgos de seguridad que conlleva. La disminución de las rutas aéreas internacionales también plantea obstáculos adicionales para la presencia operativa humanitaria. En Yemen, por ejemplo, los vuelos directos entre Adén y Ammán pasaron de 14 al mes en diciembre del año pasado a 6, mientras que la ruta Adén–Addis Abeba se redujo de 28 vuelos a ninguno en julio de 2025, cortando un vínculo clave para el personal de África oriental.

Los programas de protección para grupos vulnerables en contextos de crisis —ya de por sí crónicamente insuficiente en cuanto a financiamiento— han sido parte de las primeras víctimas de los recortes recientes. En Sudán, la red de salas de respuesta de emergencia, que contaba con equipos de protección en cada estado y un equipo especializado en la protección de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género, perdió su financiación de USAID y de otros donantes. Muchos entrevistados señalaron que la protección, junto con la capacitación presencial especializada y el acompañamiento psicológico, han estado “entre lo primero en la lista de recortes”. Como expresó uno de ellos: “Me preocupa el efecto psicológico, el bienestar del personal en el futuro, y que pueda haber menor resiliencia al estrés, lo que a su vez podría dar lugar a errores”. El estrés, el agotamiento y el trauma —comunes en el trabajo humanitario— son conocidos por afectar tanto a la seguridad del personal como a su bienestar general.⁵

La capacitación es fundamental para la gestión de riesgos de seguridad y, si bien muchas organizaciones han incrementado de forma significativa el uso de módulos virtuales, la formación presencial impartida por instructores calificados sigue siendo preferible. En aquellas organizaciones

⁵ Capítulo 5.4, Staff care. (2025). En Fairbanks, A. y Stoddard, A. (Eds.), *Humanitarian security risk management, Good Practice Review No. 8* (third edition), pp. 291–314. Humanitarian Practice Network (Overseas Development Institute). https://odihpn.org/wp-content/uploads/2025/06/GPR8_web_June2025.pdf

donde la mayoría del personal ya ha recibido capacitación en seguridad, el impacto inmediato ha sido menor, pero se prevé que aumente con el tiempo a medida que se reduzcan las oportunidades de formación. La participación en cursos esenciales, como el Safe and Secure Approaches in Field Environments - SSAFE (Programa de la ONU de Entornos Seguros en Entornos de Terreno, en español⁶), ha disminuido de manera drástica y el número de personal capacitado se está reduciendo a medida que los trabajadores abandonan sus puestos y no son reemplazados.

Pérdida de capacidad analítica

Si bien algunas organizaciones de mayor tamaño cuentan con capacidad interna para monitorear las tendencias locales de incidentes de seguridad para realizar análisis de riesgos, muchas otras dependen de servicios de apoyo externos para esta función, como la International NGO Safety Organization – INSO (Organización Internacional de Seguridad para ONGs, en español), Geneva Call y las Oficinas de Enlace para la Seguridad de los Socios de USAID (PLSO).

Desde la suspensión de la financiación de USAID, la red de PLSO ha perdido aproximadamente el 80% de su capacidad, con la mayoría de sus oficiales limitados a labores de cierre y únicamente cuatro países que continúan ofreciendo servicios de seguridad y elaboración de informes completos, sin garantías de continuidad. INSO también se ha visto obligada a cerrar oficinas de terreno y a reducir servicios, especialmente en materia de formación, lo que ha tenido un fuerte impacto en las ONG en múltiples contextos.⁷ Geneva Call, por su parte, se ha visto obligada a reducir operaciones, disminuyendo actividades y presencia en el terreno en varios países donde promovía el respeto de las normas humanitarias ante grupos armados.

Un funcionario de las Naciones Unidas en Colombia señaló: “Menos personal de seguridad implica una capacidad reducida para llevar a cabo análisis detallados de los territorios subnacionales”. El funcionario subrayó que este tipo de conocimiento local profundo —construido a través del contacto sostenido con comunidades, fuerzas armadas y otros actores— resulta esencial. Según advirtió, el mayor impacto de los recortes de financiación podría residir en esta erosión de la comprensión granular y específica de cada área, la cual es fundamental tanto para una seguridad efectiva como para un acceso y una aceptación significativos.

Efectos en el acceso

En muchos contextos, de acuerdo con las y los entrevistados, los actores humanitarios internacionales han dejado de implementar estrategias de acceso orientadas a ampliar de manera activa la cobertura hacia las zonas con necesidades más agudas. En su lugar, han optado por priorizar aquellas áreas con menor dificultad operativa y en las que las agencias ya cuentan con presencia establecida. Es previsible que esta práctica se consolide como la norma entre las organizaciones internacionales, a medida que las capacidades y el personal dedicados a la gestión de riesgos de seguridad se reduzcan en el marco de las medidas de austeridad.

Las organizaciones locales, que históricamente han sido los principales agentes de respuesta en las zonas de más difícil acceso, deberán operar cada vez más solitarias, asumiendo la mayor exposición a los riesgos de seguridad. Este patrón ya se refleja en los datos de incidentes de seguridad correspondientes a 2024.

⁶ Traducción propia

⁷ International NGO Safety Organisation. (2025, 10 February). *Impact of the suspension of USAID funding*. <https://ngosafety.org/latest/impact-of-the-suspension-of-usaid-funding/>

Nuevas amenazas a la seguridad y crisis de aceptación tras la reducción de la financiación

Las drásticas reducciones en los programas humanitarios tras la disminución de la financiación han transformado el panorama de seguridad para las agencias de asistencia humanitaria, generando nuevas vulnerabilidades y amplificando las ya existentes. En muchos contextos, la retirada abrupta de los servicios ha provocado resentimiento entre las poblaciones afectadas, mientras que la reducción de personal ha incrementado la exposición de las organizaciones y de las personas que permanecen en el terreno. Estas dinámicas empeoran por la erosión de la aceptación, impulsada en parte por narrativas nocivas, la desinformación y la difusión de información falsa, que cada vez inciden más en la percepción de las amenazas y en las actitudes hacia los actores humanitarios.

3.1 Aumento de tensiones tras cierres abruptos y pérdida de servicios vitales

Los datos provisionales de 2025 incluyen un número reducido de incidentes de seguridad graves con evidencia de un vínculo directo con el cierre de programas o la reducción de actividades derivados de la falta de financiación. Es probable que la cifra real sea más elevada, ya que muchas organizaciones locales no informan este tipo de incidentes y otros no cumplen los criterios de inclusión de la AWSD, al no haber resultado en la muerte de trabajadores humanitarios, lesiones graves o secuestros/detenciones superiores a 24 horas. Otros recopiladores de datos y personas entrevistadas señalaron agresiones, robos de vehículos, allanamientos, protestas y otros actos atribuidos a antiguos empleados descontentos o miembros de comunidades afectadas, de los cuales solo una parte fue notificada formalmente.

Las entrevistas describieron distintos focos de tensión: personal despedido organizando protestas o enfrentamientos en oficinas; presuntos allanamientos perpetrados por exempleados; proveedores exigiendo pagos bajo amenaza de armas de fuego; y pacientes con VIH desesperados protestando tras la suspensión de sus servicios de salud. En las zonas rurales, la confusión y la desinformación acerca de los recortes de financiación han alimentado la sospecha comunitaria de que las agencias de ayuda “malgastan” o desvían fondos. Los grupos armados han explotado estas quejas –particularmente en el extremo noroeste y noreste de Sudán– para bloquear el acceso y consolidar su control. Las ONG nacionales subrayaron que la pérdida de presencia erosiona la “protección mutua” que se deriva del compromiso sostenido, dejando tanto a las comunidades como al personal humanitario más expuestos.

Los efectos se extienden más allá de los incidentes de seguridad directos. En algunos contextos, la interrupción abrupta de proyectos –como los servicios de protección, el acompañamiento o la labor comunitaria– ha eliminado factores esenciales de estabilización. El cierre de puntos de distribución remotos de ayuda en Nigeria ha provocado un aumento de los desplazamientos de personas en busca de servicios, lo que los grupos armados no estatales han aprovechado para ampliar los territorios bajo su control. En partes del Sahel y la República Centroafricana, los gobiernos han alimentado narrativas contrarias a las ONG internacionales en un marco de desconfianza preexistente, y en el este de la República Democrática del Congo algunas organizaciones han asumido riesgos operacionales mayores para obtener escasa financiación, viéndose forzadas por los donantes a “hacer más con menos” y sobrepasando sus umbrales habituales de seguridad.

3.2 Pérdida de aceptación amplificada por la desinformación

La crisis de financiación no solo ha reducido la capacidad operativa, sino que también ha alimentado una crisis de aceptación en numerosos contextos. Narrativas perjudiciales de larga data –que presentan a las agencias humanitarias como entidades controladas por intereses extranjeros, con motivaciones políticas o incluso alineadas con actores armados– se han visto reforzadas y, en algunos casos, deliberadamente instrumentalizadas.⁸ Según Insecurity Insight, los análisis de sentimiento en redes sociales realizados en el Sahel y la República Democrática del Congo (RDC) muestran que la crisis se ha utilizado para sostener afirmaciones de que la asistencia humanitaria es un instrumento de control occidental o una forma de “colonialismo”, así como para perpetuar acusaciones de que las agencias apoyan a organizaciones terroristas.⁹ Estas narrativas circulan en entornos altamente politizados, lo que dificulta diferenciar entre creencias arraigadas y contenidos fabricados o amplificados por influenciadores y actores políticos.

Declaraciones despectivas de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han sido aprovechadas por autoridades locales y otros grupos hostiles a la asistencia internacional, reflejándose en incidentes de hostigamiento documentados por entrevistados. Un antiguo funcionario de USAID relató que un representante gubernamental hostil llegó a increpar a un trabajador humanitario con las palabras: «Si su presidente dice que usted es un criminal, ¿por qué no debería arrestarlo ahora mismo?».

En Sudán, Yemen y partes del Sahel, la desinformación a nivel comunitario ha derivado en hostilidad y restricciones de acceso. Algunos residentes, sin conocimiento del contexto externo de la financiación, han supuesto que los trabajadores humanitarios han malgastado o retenido recursos. Grupos armados han explotado estas percepciones para obstaculizar operaciones y consolidar control territorial, especialmente en áreas rurales en disputa.

Las redes sociales se han convertido en un vector central para la propagación de información errónea y desinformación sobre actores humanitarios. En un caso documentado en la República Democrática del Congo por Insecurity Insight, una máquina de rayos X robada apareció en línea acompañada de afirmaciones falsas de que había sido entregada por una agencia humanitaria a un grupo armado. Aunque la causalidad es difícil de establecer, el trabajador humanitario posteriormente asesinado en esa región fue descrito en comentarios en línea como alguien que “lo merecía”. Ataques similares han incluido campañas de desprestigio contra agencias concretas y la ridiculización de trabajadores despedidos, presentados como involucrados en actividades “woke” o no esenciales.

Frente a estas presiones, muchas organizaciones han optado por guardar silencio público para evitar mayor exposición. Sin embargo, como advierte Insecurity Insight, esa ausencia de respuesta puede ceder terreno a narrativas hostiles y dificultar la recuperación del espacio humanitario una vez se haya perdido. A este problema se suma que, con frecuencia, las comunicaciones públicas recurren a un lenguaje excesivamente diplomático o ambiguo, percibido por las comunidades como evasivo. Los entrevistados coincidieron en que se requiere una comunicación más clara y precisa, acompañada de un compromiso directo con las comunidades, para contrarrestar eficazmente la desinformación y sostener la aceptación en un entorno operativo cada vez más disputado.¹⁰

⁸ Insecurity Insight. (2025, 9 de abril). “All the NGOs are there to supply terrorists”: Hijacking of an INGO truck sparks controversy. *Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/04/5.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-.pdf

⁹ Véase: Insecurity Insight. (2025, 16 de julio). “Good riddance”: Renewed anti-USAID sentiment in Mali following closure announcements. *Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/07/15.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-1.pdf; y Insecurity Insight. (2025, 9 de julio). “Very very good decision by the government”: NGO suspensions spark growing online support in Burkina Faso. *Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/07/14.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-.pdf

¹⁰ Véase: Capítulo 6.2, Security in a digital world (2025). In Fairbanks, A. and Stoddard, A. (Eds.), Humanitarian security risk management, *Good Practice Review No. 8* (third edition), pp. 358–382. Humanitarian Practice Network (Overseas Development Institute). https://odihpn.org/wp-content/uploads/2025/06/GPR8_web_June2025.pdf

3.3 Pérdida de datos y “desprofesionalización”

Durante años, USAID fue uno de los principales inversores en datos humanitarios, financiando una amplia gama de sistemas fundamentales para la respuesta a crisis –desde los mecanismos de alerta temprana de hambrunas y la vigilancia de salud pública hasta el seguimiento de desplazamientos, las evaluaciones de necesidades y el análisis de seguridad operativa. Estos sistemas, cada vez más interdependientes y diseñados para compartir información y evitar duplicaciones, constituyen un soporte crítico para la toma de decisiones.

La retirada repentina de la financiación de USAID a comienzos de 2025 no solo ha puesto en riesgo flujos de datos individuales, sino que también ha expuesto la vulnerabilidad estructural del sector a un colapso en cascada. La pérdida de un flujo de datos puede degradar la eficacia de otros, reduciendo la capacidad de orientar decisiones, asignar recursos y anticipar riesgos.¹¹

En lo que respecta a la seguridad del personal humanitario, hasta enero de 2025 todos los principales recopiladores de datos de incidentes de seguridad a nivel mundial recibían algún tipo de financiación o asistencia técnica de USAID. Aún no se conocen en su totalidad los efectos de la retirada de fondos sobre estos sistemas, pero ya se han comenzado a cerrar organizaciones que durante años habían servido como fuentes primarias de información en contextos de alta inseguridad. Las organizaciones humanitarias independientes dedicadas a la producción de análisis para orientar a los responsables de la toma de decisiones enfrentan el mayor riesgo de cierre, en tanto otros donantes evalúan apresuradamente qué estructuras aún pueden preservarse.¹² Mientras algunos programas inicialmente afectados por la retirada de fondos –como FEWS NET– han logrado asegurar fuentes de apoyo alternativas, la magnitud del papel desempeñado por USAID en este ámbito hace improbable que todos los flujos de datos sobre seguridad logren mantenerse. La pérdida parcial o total de estos sistemas amenaza con generar vacíos críticos de información, reduciendo la capacidad del sector humanitario para anticipar riesgos, garantizar la seguridad del personal y orientar la respuesta de manera eficaz.

Desprofesionalización

La contracción del sector ha dado lugar a tendencias de desprofesionalización en diversas áreas, incluida la gestión de riesgos de seguridad. A medida que proveedores de servicios de apoyo como INSO reducen sus operaciones, y que las organizaciones pierden capacidad interna de formación en seguridad, los foros de coordinación en algunos países han comenzado a reunir recursos y a gestionar sus propias funciones de seguridad ad hoc. Aunque esto demuestra iniciativa y un sentido de solidaridad, también refleja un retorno a prácticas fragmentadas e inconsistentes y conlleva el riesgo de perder el conocimiento institucional acumulado a lo largo de muchos años.

Las organizaciones han priorizado el mantenimiento de la presencia en el terreno recortando primero los puestos en las sedes y niveles regionales, aunque esto igualmente ha resultado en la pérdida de puestos de seguridad a nivel de país, incluidos formadores y funciones de “formación de formadores”. Un alto directivo de una ONG señaló que la movilidad de personal –que idealmente debería ser un intercambio saludable entre organizaciones– se ha convertido en un flujo unidireccional hacia fuera de las ONG, con profesionales experimentados que migran hacia agencias de la ONU con más recursos o, cada vez más, hacia el sector privado.

Varios entrevistados mencionaron la salida de especialistas de seguridad de alto nivel hacia la banca y otros sectores corporativos, motivados por la necesidad de estabilidad profesional. Esta fuga de cerebros, sumada a la pérdida de puestos de seguridad, no solo debilita la seguridad operacional, sino que además revierte más de una década de avances en la profesionalización de la seguridad humanitaria.

¹¹ Stoddard, A., Waldman, R., Nissen, L.P. and Spiegel, P.B. (2025, 10 March). *The data streams that underpin humanitarian response are about to collapse*. The New Humanitarian. <https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2025/03/10/data-streams-underpin-humanitarian-response-are-about-collapse>

¹² Breckenridge, M.-J. (De próxima publicación). *Data in the humanitarian space*. In Plowright, W. and Dube, N. (Eds.). *The companion to humanitarian action, 2nd edition*. Routledge, New York.

Ante los recortes de financiación, las organizaciones humanitarias han puesto en marcha diversas medidas de adaptación para sostener sus operaciones y gestionar los riesgos de seguridad con recursos cada vez más limitados. Si bien algunos de estos cambios ya se contemplaban antes de la crisis de financiación, la urgencia del contexto actual ha acelerado su implementación.

La integración de los departamentos de seguridad y acceso – hasta hace poco concebidos como funciones diferenciadas – se ha vuelto cada vez más habitual, con especialistas en seguridad que ahora participan directamente en negociaciones. De acuerdo con los entrevistados, la gestión del riesgo de seguridad siempre ha incorporado elementos de facilitación del acceso; no obstante, el giro actual brinda la oportunidad de consolidar este rol e integrarlo plenamente en las funciones de seguridad cotidianas.

El uso compartido de recursos y la ubicación compartida se están consolidando como medidas prácticas de ahorro. En Burkina Faso, por ejemplo, una organización que ya no podía sostener sus oficinas ofreció espacio a otras, lo que dio lugar a que varias compartan un mismo edificio. Disposiciones similares se han replicado tanto a nivel central como en oficinas locales, con organizaciones que comparten instalaciones, concentran funciones administrativas y colaboran en el análisis de seguridad. En aquellos contextos donde se han eliminado puestos de personal de seguridad, los mecanismos de apoyo mutuo permiten mantener la elaboración de evaluaciones conjuntas de riesgos y recomendaciones, aun sin contar con financiamiento específico.

Aunque estas medidas han generado tensiones – al exigir que menos personas asuman la misma carga de trabajo – los entrevistados coincidieron en que también han fortalecido el sentido de solidaridad humanitaria en diversos entornos.

Como parte de las respuestas a la crisis de desfinanciación, varias organizaciones han recurrido a soluciones tecnológicas con el fin de optimizar el uso de recursos humanos cada vez más limitados. Una de las fuentes consultadas señaló: “Aunque habíamos iniciado este proceso antes de la crisis de financiación, esta le dio un mayor impulso a la digitalización en seguridad, con el objetivo de hacer los procesos más eficientes.” Entre las medidas adoptadas figuran la integración de herramientas de inteligencia artificial para el control de calidad – incluida la verificación de incidentes – y la elaboración de informes pre-redactados, lo que permite a los responsables concentrarse en tareas de mayor prioridad. Si bien la inteligencia artificial puede desempeñar un papel clave para sostener la eficacia en un entorno de recursos reducidos, algunos responsables de seguridad expresaron su preocupación de que también pueda acelerar la pérdida de capacidades y conducir a nuevas reducciones de personal.

La crisis de desfinanciación también ha puesto en evidencia la necesidad de un enfoque más estratégico respecto al espacio informativo en línea. Durante años, muchas agencias humanitarias han considerado las redes sociales principalmente como una herramienta de recaudación de fondos y comunicación pública, sin reconocerlas plenamente como un espacio en disputa crucial para la defensa de los principios humanitarios y la aceptación. Como destacó un entrevistado, “No vimos venir al monstruo”, en alusión a la proliferación de narrativas hostiles y campañas de desinformación. En este contexto, el monitoreo de redes sociales y un compromiso proactivo y basado en principios – concebido como responsabilidad colectiva más que como competencia entre agencias – son cada vez más reconocidos como esenciales para salvaguardar el espacio humanitario.

Paralelamente, en 2024 avanzaron nuevas iniciativas diplomáticas orientadas a la protección del personal humanitario. Un grupo reducido pero activo de Estados Miembros de las Naciones Unidas ha pasado de expresar preocupación a promover medidas concretas de rendición de cuentas. La Resolución 2730 (2024) del Consejo de Seguridad exhorta a los Estados Miembros a llevar a cabo investigaciones independientes, rápidas y eficaces sobre las violaciones contra el personal humanitario y de la ONU, enjuiciar a los responsables y cooperar con los tribunales y cortes competentes, con el fin de reforzar la prevención, garantizar la rendición de cuentas y atender las demandas de las víctimas. Asimismo, Australia prepara una Declaración Ministerial Conjunta destinada a consolidar la voluntad política y coordinar la acción entre gobiernos afines, lo que refleja una disposición a actuar de manera colectiva en defensa de las normas humanitarias.¹³ Si bien estas iniciativas no bastan por sí solas para revertir la actual tendencia, ofrecen una plataforma prometedora para ejercer presión política sostenida y traducir el respaldo retórico en protecciones tangibles.

Conclusión: perspectivas y desafíos futuros

El acceso humanitario, la seguridad operacional y el financiamiento están intrínsecamente vinculados. En este sentido, los niveles de violencia contra el personal humanitario sin precedentes registrados en 2024, sumados a la abrupta suspensión de la financiación de los Estados Unidos en 2025, han dado lugar a crisis superpuestas: la pérdida de servicios esenciales para las comunidades, el aumento de los riesgos para el personal humanitario y la erosión de las capacidades profesionales y analíticas que sustentan operaciones seguras y basadas en principios.

La evidencia recogida demuestra que los riesgos de seguridad derivados de los recortes no se circunscriben únicamente a las zonas de conflicto de mayor visibilidad. Abarcan contextos que van desde Gaza hasta Colombia, con incidentes que incluyen desde protestas comunitarias hasta ataques dirigidos contra trabajadores humanitarios. En diversos casos, la reducción de programas ha dejado a los actores nacionales expuestos a riesgos desproporcionados, mientras la desinformación y las narrativas manipuladas han debilitado aún más los niveles de aceptación.

De no adoptarse medidas claras por parte de donantes y actores diplomáticos, las tendencias actuales proyectan un escenario en el que las operaciones humanitarias serán más limitadas, más riesgosas y menos eficaces, precisamente en un contexto de crecientes necesidades globales y amenazas a la seguridad. Preservar el derecho internacional humanitario y los principios que guían la respuesta humanitaria requerirá voluntad política coordinada, un compromiso financiero sostenido y esfuerzos deliberados para revertir la tendencia hacia la desprofesionalización. Una vía clave podría consistir en canalizar los recursos disponibles hacia los actores locales que enfrentan los mayores peligros en las crisis más graves del mundo.

¹³ Australia, Jordania, Suiza, Indonesia, Sierra Leona, Reino Unido, Japón, Brasil, y Colombia. (2024, 23 de septiembre). *Joint statement: Towards a new declaration for the protection of humanitarian personnel*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100729453.pdf>

REFERENCIAS Y RECURSOS RELACIONADOS

Australia, Jordania, Suiza, Indonesia, Sierra Leona, Reino Unido, Japón, Brasil, y Colombia. (23 de septiembre de 2024). *Joint statement: Towards a new declaration for the protection of humanitarian personnel*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100729453.pdf>

Breckenridge, M.-J. (De próxima publicación). *Data in the humanitarian space*. En Plowright, W. y Dube, N. (Eds.). *The companion to humanitarian action* (2.ª ed.). Routledge, New York.

Fairbanks, A. y Stoddard, A. (Eds.). (2025). *Humanitarian security risk management. Good Practice Review No. 8* (3.ª ed.). Humanitarian Practice Network (Overseas Development Institute). <https://humanitarianoutcomes.org/projects/humanitarian-security-risk-management-good-practice-review-8-3rd-edition>

Global Interagency Security Forum (GISF) y Humanitarian Outcomes. (2024). *State of practice: The evolution of security risk management in the humanitarian space*. https://humanitarianoutcomes.org/security_risk_mgmt_humanitarian_space_2024

Humanitarian Outcomes. (s.f.). *Global database of humanitarian organisations*. Recuperado el 8 de agosto de 2025 de <https://humanitarianoutcomes.org/projects/gdho>

Humanitarian Outcomes. (s.f.). *Aid Worker Security Database*. <https://www.aidworkersecurity.org/>

International Council of Voluntary Agencies (ICVA). (2025). *The impacts of the US funding suspension*. ICVA survey findings. <https://www.icvanetwork.org/uploads/2025/02/Impact-of-US-Funding-Suspension-Survey-Results-ICVA.pdf>

Insecurity Insight. (9 de abril de 2025). *"All the NGOs are there to supply terrorists": Hijacking of an INGO truck sparks controversy. Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/04/5.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-.pdf

Insecurity Insight. (9 de julio de 2025). *"Very very good decision by the government": NGO suspensions spark growing online support in Burkina Faso. Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/07/14.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-.pdf

Insecurity Insight. (16 de julio de 2025). *"Good riddance": Renewed anti-USAID sentiment in Mali following closure announcements. Tracking aid narratives on social media: Emerging trends in the Sahel*. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/07/15.-Tracking-Aid-Narratives-on-Social-Media_-Emerging-Trends-in-the-Sahel-1.pdf

International NGO Safety Organisation (INSO). (10 de febrero de 2025). *Impact of the suspension of USAID funding*. <https://ngosafety.org/latest/impact-of-the-suspension-of-usaid-funding/>

Loy, I. (6 de marzo de 2025). *Why are NGOs cutting staff faster than the UN?* The New Humanitarian. <https://www.thenewhumanitarian.org/newsletter/2025/03/06/inklings-why-are-ngos-cutting-staff-faster-un>

Stoddard, A., Waldman, R., Nissen, L.P., y Spiegel, P.B. (10 de marzo de 2025). *The data streams that underpin humanitarian response are about to collapse*. The New Humanitarian. <https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2025/03/10/data-streams-underpin-humanitarian-response-are-about-collapse>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). *Financial Tracking Service*. <https://fts.unocha.org/>

United Nations Security Council. (31 de mayo de 2024). *Resolution 2730 (2024) on the safety and security of UN and humanitarian personnel*. Security Council Report. <https://www.un.org/en/un-department-safety-and-security/security-council-adopts-resolution-safety-and-security>

[illegible]

AID WORKER SECURITY DATABASE
www.aidworkersecurity.org